

Demanda en juicio ordinario por despido injustificado.

Santiago, cinco de junio de dos mil veintitrés.

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:

1º: Que comparece don JAVIER IGNACIO MORAGA GRANDON, dependiente, domiciliado en Montenegro 2396 A, dpto 503, comuna de Ñuñoa, quien interpone demanda en contra de su ex empleadora la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, representada judicialmente por Consejo de Defensa del Estado, representado legalmente por la su Procuradora Fiscal de la Región Metropolitana, doña RUTH ISRAEL LÓPEZ, o por quien lo represente o subroque conforme al artículo 4º del Código del Trabajo y en forma legal, ambos con domicilio en Agustinas 1225 piso 4to comuna de Santiago.

Refiere que su representado comenzó a prestar servicios para la demandada con fecha 08 de junio de 2020, escriturándose dicho contrato el 15 de junio de 2020, desempeñando labores de “Reforzar la vigilancia epidemiológica decretada por nuevo SARS Cov 2 en el mes de marzo de la Alerta Sanitaria”.

Posteriormente, con fecha 07 de septiembre de 2020, se le obligó para poder continuar prestando servicios, a suscribir con el mismo empleador, un nuevo contrato de trabajo, en el cual se estipuló que sus labores serían desempeñarse como “Fiscalizador de las medidas sanitarias decretadas por la autoridad en el contexto de pandemia por Covid 19”.

En la cláusula segunda de ambos contratos de trabajo, se estableció que la actividades que desempeñaría el suscrito, se debían desarrollar dentro del marco establecido por el Decreto 4 del Ministerio de Salud, promulgado el 05 de febrero de 2020 y publicado en el Diario Oficial de fecha 08 de febrero del mismo año, que decreta Alerta Sanitaria y otorga las facultades extraordinarias que indica en el territorio de la República de Chile, en la Región Metropolitana, el cual fue modificado por el decreto 6 promulgado el 6 de marzo de 2020 y publicado el 07 de marzo del mismo año, que otorga las facultades extraordinarias que indica por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPI) por brote del nuevo coronavirus.



Su contrato de trabajo era por obra o faena. De acuerdo a la cláusula Octava del mencionado contrato, se estableció clara, expresa y determinadamente que los servicios se prestarían hasta que se extendiera “la Alerta Sanitaria.”

A la fecha del término de la relación laboral, los servicios se prestaban en la ciudad de Santiago, Región Metropolitana debiendo asistir al inicio de su jornada a las dependencias del empleador donde se me impartían las instrucciones diarias. La remuneración mensual ascendía a \$896.130 pesos brutos.

Con fecha 31 de octubre de 2020, fui informado del término de la relación laboral a contar de esa misma fecha, supuestamente por haber concluido el trabajo o servicio que dio origen al contrato, es decir, el empleador fundó el despido y así se menciona en el nulo finiquito, en la causal contemplada en el artículo 159 número 5 del Código del Trabajo, esto es conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato. De esta irregularidad reclamé a la Contraloría General de la República en reclamo Rol 2.944/20, y con fecha 01 de septiembre de 2021, dicho organismo determinó que su separación era ilegal por lo que su empleador debía reintegrarme a mis funciones y pagarle las remuneraciones adeudadas por los meses en que he estado injustamente e ilegalmente separado de mis funciones.

La alerta sanitaria a la fecha del despido, e incluso al día de hoy, se mantenía y mantiene vigente conforme consta del último decreto que prorrogó aquel estado, decreto N° 75 de fecha 22 de septiembre de 2022, del MINISTERIO DE SALUD Subsecretaría de Salud Pública, publicado en el Diario Oficial del día 30 de septiembre de 2022. Este decreto fue sucesiva e ininterrumpidamente prorrogado hasta estos días por otros Decretos

Se suscribe finiquito con fecha 4 de mayo de 2020, mediante presión y engaño, y con el exclusivo fin de que se celebrará un nuevo contrato que se le señaló era requerido por el departamento de recursos humanos, cuestión que a la larga no fue efectiva; sin perjuicio de aquello, dicho finiquito por sí solo induce a error y es evidentemente nulo e ineficaz. Ello por cuanto en tal finiquito no se hace referencia a su primer contrato de fecha 15 de junio de 2020, y es un documento, en el cual con una letra diminuta se incluyen sumas que ni siquiera se condicen con los propios antecedentes, por ejemplo, se indica como total trabajado, un mes y 25 días, es decir 55 días en total, sin perjuicio para el cálculo del feriado legal solo se consideran 25 días. Además, se debe considerar que este finiquito, no se ha extendido a las remuneraciones del tiempo restante posterior por el cual



el empleador pretendió interrumpir de manera ilegal y arbitraria, y ello por cuanto del propio mérito del instrumento vemos que se trata de un documento con expresiones genéricas, incluso sin referencia específica a tal determinado derecho. El finiquito adolece además de vicios del consentimiento, cuales son el error, la fuerza moral y además adolece de objeto ilícito, pues se le obliga a firmar bajo presión que de no hacerlo no existiría una nueva contratación.

De este modo, el finiquito pretende vulnerar normas de orden público, como son la existencia del estado de Alerta Sanitaria aún vigente a esta fecha del finiquito, y sin embargo aquello el empleador pretende poner término a un contrato laboral de obra o faena precisamente vigente hasta que permanezca el estado de Alerta Sanitaria. Lo anterior es un acto ejecutado con evidente fraude a la ley. Luego, el finiquito celebrado en estas condiciones con infracción de esta prohibición legal, es nulo de nulidad absoluta, con arreglo al artículo 10 del Código Civil en relación con los artículos 1445 N° 3, 1462, 1466 parte final del mismo cuerpo legal, pues se ha ejecutado un acto con vicio de objeto ilícito, cuya sanción es la nula de nulidad absoluta conforme a los artículos 1681, 1682 y 1683 todos del Código Civil, en relación con los artículos 1445 N°3 y 1466 del mismo cuerpo de leyes.

Conforme a lo anteriormente relatado, y dada la renuencia del demandado a pagar sus remuneraciones y/o a reincorporarse a sus funciones a contar del mes de noviembre de 2020 a la fecha, solicite se condene a la demandada a pagar las sumas, por las prestaciones que se indican: La suma de \$23.299.380 o la suma mayor que determine el tribunal por concepto de indemnización del lucro cesante y/o por prestaciones adeudadas, equivalente a las remuneraciones devengadas durante periodo comprendido entre el mes de noviembre de 2020 a diciembre de 2022, fecha en que concluye la Alerta Sanitaria, o en la fecha en que la autoridad o el tribunal den por terminada la alerta sanitaria, lo anterior con los reajustes e intereses, de acuerdo al artículo 63 y 173 del Código del Trabajo así como las costas de la causa.

2°: Comparece doña RUTH ISRAEL LOPEZ, RUT: 9.772.243-9, Abogada Procurador Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, en representación del FISCO DE CHILE, ambos domiciliados para estos efectos en calle Agustinas N° 1225, Piso 4°, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana.



Solicita el total y absoluto rechazo de la acción incoada, dado que carece de todo sustento fáctico y jurídico. En primer lugar, y tal como lo señala la demandante, se puso término al contrato de trabajo por la causal del artículo 159 N° 5 del Código del Trabajo, esto es, conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato.

En un primer término opone la excepción de finiquito y en subsidio excepciones de pago y transacción. Sostiene que de conformidad con el artículo 177 del Código del Trabajo, el finiquito legalmente celebrado tiene pleno poder liberatorio a favor de la parte demandada, sin que proceda discutir su contenido entre las partes. En efecto, el finiquito entre el demandante y la seremi de Salud RM, de fecha 10 de agosto de 2021, cumplió con las formalidades exigidas por el ya citado artículo 177, toda vez que: consta por escrito; se encuentra firmado por el actor y fue ratificado por esta última ante el Notario Público de Santiago, con fecha 10 de agosto de 2021. En el mencionado finiquito se lee en la Cláusula segunda: “Moraga Grandón Javier Ignacio, declara recibir en este acto a su entera satisfacción, de parte la Seremi de Salud RM la suma de \$158.018”. Por tanto, constituido en la forma exigida por el artículo 177 del Código del Trabajo conforma una convención que genera o extingue derechos y obligaciones entre aquellos que lo suscriben, que si no infringe los principios protectores existentes en materia de derecho laboral, y no se refiere a materias prohibidas de renunciar, se rige por las normas del derecho común, principalmente por lo preceptuado por el artículo 1545 del Código Civil. En subsidio y fundadas en los mismos argumentos opone la excepción de pago y transacción, ya que como se ha señalado todas las obligaciones laborales y previsionales devengadas en favor del actor fueron pagadas debidamente, y en el finiquito se pactó transacción, y renuncia de acciones de modo de, justamente, precaver un litigio eventual.

Las partes suscribieron Contrato de Trabajo por Alerta Sanitaria con fecha 15 de junio de 2020, sin perjuicio de que se dio inicio a la relación laboral el 08 de junio de 2020. Su vigencia fue pactada originalmente hasta el 30 de junio del mismo año. En dicho contrato, el funcionario se comprometía a desarrollar labores como Operario en la Estrategia Sanitaria de Call Center en jornada de lunes a viernes en horarios de 8:30 a 18:30 horas, con una hora de colación. Posteriormente, suscribieron anexo de contrato de acuerdo al cual acuerdan prorrogar la vigencia del mismo hasta el día 31 de julio de 2020, fecha en la cual Javier Moraga Grandon es desvinculado en virtud de la causal establecida en el artículo 159 N°4 del Código del Trabajo, esto es, vencimiento del plazo convenido en el



contrato. Sobre esta desvinculación, no existe reclamo, además de encontrarse prescrita cualquier acción respecto de ella. Luego, el 31 de julio de 2020, se le procede a comunicar a Javier Moraga Grandon que, con esa misma fecha, se pone término a su contrato de trabajo en virtud de la causal del artículo 159 N°4 del Código del Trabajo, esto es, vencimiento del plazo convenido en el contrato.

Posteriormente, con fecha 07 de septiembre de 2020, entre esta SEREMI de Salud RM y el demandante Javier Moraga Grandon, se pactó un nuevo Contrato de Trabajo por Alerta Sanitaria, estableciéndose nuevas funciones en una Estrategia Sanitaria diversa a la anterior, con una nueva jornada laboral, desempeñándose como fiscalizador de medidas sanitarias decretadas por la autoridad en el contexto de pandemia por COVID-19. En dicho contrato, el que se acompaña, se pactó su vigencia “hasta el término de la Alerta Sanitaria”, sin perjuicio de la facultad que le asiste al empleador de poner término anticipado si las condiciones sanitarias así lo permiten, caso en el cual se entendería concluido el trabajo o servicio que dio origen al presente contrato. En este contexto, con fecha 30 de octubre del 2020 se procedió a comunicar al demandante por medio de Carta de Aviso de Término de Contrato de Trabajo que el vínculo laboral entre las partes finalizaría a partir del día 01 de noviembre de 2020, de acuerdo a lo señalado por la causal del artículo 159 N°5 del Código del Trabajo, esto es, término del trabajo o servicio que dio origen al contrato.

Frente a esta desvinculación, Javier Moraga Grandon realizó una presentación ante Contraloría Regional de la República, la que por medio de Oficio N° E534496/2020 (Ref. N° R2944/20) remitió copia a SEREMI de Salud RM solicitando informe, indicando que el recurrente exponía estar en desacuerdo con la causal de desvinculación invocada en su carta de despido de fecha 30 de octubre de 2020, al no informarse las razones. Sin perjuicio de la argumentación y documentación entregada, por medio de Oficio N° E222574/2022, la Contraloría Regional concluye que no se encuentra debidamente fundado el término del contrato, razón por la cual se requiere a la SEREMI de Salud RM a reincorporar en sus labores a Javier Moraga Grandon, debiendo pagarle la totalidad de las remuneraciones que se le adeuden por el tiempo durante el cual estuvo indebidamente separado de sus funciones. No obstante, lo anterior, con fecha 10 de agosto de 2021, el demandante firmó su finiquito de contrato de trabajo, encontrándose enteradas sus cotizaciones previsionales, no existiendo obligaciones pecuniarias pendientes por parte de esta SEREMI de Salud RM para con el recurrente, cumpliendo en la especie con los requisitos señalados en el artículo



177 del Código del Trabajo. En este sentido, el Sr. Moraga Grandon, al concurrir a firmar su finiquito, manifestó expresamente que renunció a ejercer cualquier acción o reclamo en contra de la Autoridad Sanitaria Regional, desistiéndose así de su reclamación ante el Ente Contralor y futuras acciones judiciales, como la que se intenta. Lo anterior, se hizo presente a Contraloría Regional de la República por medio de solicitud de reconsideración de fecha 13 de julio de 2022, Ord. N° 2089-2022. Finalmente, en vista y consideración de lo señalado, por medio de Oficio N° E240201/2022 (Ref. N° 903.398/22), la Contraloría Regional de Santiago concluyó señalando que del examen del finiquito de contrato de trabajo de 04 de mayo de 2021, se advierte que esta SEREMI de Salud RM elaboró la respectiva propuesta de finiquito, instrumento que fue puesto a disposición de la 35ª Notaría de Santiago, el que fue firmado por el Sr. Moraga Grandon con fecha 10 de agosto de 2021, renunciando a cualquier derecho, acción o reclamo. Siendo ello así, en Órgano de Control procede a concluir que la problemática se encuentra actualmente superada.

Argumenta la improcedencia de la nulidad del finiquito. El demandante fue desvinculado cumpliéndose todos los requisitos legales, se remitió carta de notificación señalándose la causal del despido y se firmó finiquito ante notario sin realizar reserva de derechos. Por tanto, la demanda de indemnización de lucro cesante, es completamente improcedente y extemporánea.

Con motivo de lo anterior se deberá rechazar la demanda, en todas sus partes, con costas.

3º: Se llevó a efecto la audiencia preparatoria que dispone el procedimiento, instancia en la cual se efectuó el llamado a conciliación que dispone el mismo, el que no prosperó.

A continuación, se establecieron como hechos pacíficos: 1) Que con fecha 7 de septiembre del año 2020 las partes celebran un contrato, el que se pone término el 31 de octubre del año 2020, por la causal del artículo 159 N°5.

Como hechos controvertidos se dispuso: 1) Contenido del contrato celebrado entre las partes con fecha 7 de septiembre de 2020. En concreto, funciones para las que fue contratado el actor; obra o faena a la que se encontraba supeditado; y en general cláusulas contractuales que regulaban su terminación. 2) Hechos, circunstancias y pormenores que rodearon la suscripción del finiquito de fecha 04 de mayo de 2021 por parte del demandante. Contenido y extensión del mismo. 3) Remuneración pactada y efectivamente percibida por el actor.



4º: En la audiencia de juicio, las partes procedieron a incorporar los medios probatorios:

Prueba demandada:

Documental:

- 1) Contratos de trabajo del demandante y sus respectivos anexos.
- 2) Certificado de relación de servicio.
- 3) Carta de aviso de término de contrato.
- 4) Comprobante de carta de aviso de la Dirección del Trabajo.
- 5) Certificado de pago de cotizaciones previsionales del demandante.
- 6) Finiquito del demandante firmado ante notario con fecha 10 de agosto de 2021.
- 7) Oficio E53496-2020, de la Contraloría General de la República.
- 8) Oficio E134683-2021 de la Contraloría General de la República de fecha 1 de septiembre de 2021.
- 9) ORD 2089 de la SEREMI Regional Metropolitana de fecha 13 de julio de 2022.
- 10) Oficio E240201-2022, de la Contraloría General de la República. La prueba documental no fue objetada ni de fondo ni de pertinencia.

Prueba demandante:

Documental:

- 1) Contrato de Trabajo de fecha 15 de junio de 2020.
- 2) Anexo contrato trabajo de fecha 01 de julio de 2020.
- 3) Contrato de trabajo de fecha 07 de septiembre de 2020.
- 4) Carta aviso término contrato
- 5) Comprobante de carta de aviso de la Dirección del Trabajo.
- 6) Finiquito del demandante de fecha 04 de mayo de 2021.
- 7) Reclamo 2944/2020 de fecha 20/11/2020 ante la Contraloría de la República.



8) Oficio E53496-2020 de la Contraloría General de la República.

9) Oficio E134683-2021 de la Contraloría General de la República de fecha 1 de septiembre de 2021. 10) Certificado de Pago de Cotizaciones Previsionales, emitido por Previred.

Testimonial:

Declaración de doña Nelly Patricia Stefoni González.

5º: Respecto a la excepción de finiquito, el documento en cuestión y que ambas partes incorporan se titula “FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO”, aquel en su encabezado señala como fecha de extensión del documento el día 04 de mayo de 2021, sin perjuicio que este fue firmado ante notario Público con fecha 10 de agosto de 2021. Se menciona como empleador a la demandada y a don Javier Moraga Grandón como trabajador. En su cláusula primera se indica que el trabajador presta servicios desde el 07 de septiembre de 2020 y hasta el 31 de octubre de 2020 oportunidad en que concluye por a causal del artículo 159 N° 5 del Código del Trabajo “conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato”. En su cláusula segunda el trabajador declara recibir a su entera satisfacción la suma de \$158.018 que corresponden a la indemnización que deriva del tiempo servido mediante dicho contrato y a los días trabajador pendientes de pago.

En su cláusula cuarta se menciona (sic) “*MORAGA GRANDON JAVIER IGNACIO deja constancia que durante el tiempo que prestó servicios a la Subsecretaría de Salud Pública, recibió oportunamente el total de las remuneraciones, beneficios y demás prestaciones convenidas de acuerdo su contrato de trabajo, clase de trabajo ejecutado y disposiciones legales pertinentes, y que en tal virtud el empleador nada la deuda por tales conceptos, ni por horas extraordinarias, asignación familiar, feriado, indemnización por años de servicios, imposiciones previsionales, así como por ningún otro concepto, ya sea legal o contractual, derivado de la prestación de sus servicios, de su contrato de trabajo o de la terminación del mismo. En consecuencia, D MORAGA GRANDON JAVIER IGNACIO declara que no tiene reclamo alguno que formular en contra de la subsecretaría de salud pública, renunciando a todas las acciones que pudieran emanar del contrato que los vinculó.*

QUINTO: En virtud de lo anteriormente expuesto, D MORAGA GRANDÓN JAVIER IGNACIO manifiesta expresamente que la subsecretaría de salud pública, nada la deuda en relación con los servicios prestados, con el contrato de trabajo con motivo de la terminación del mismo, por lo que el libre y espontáneamente, y con el pleno y cabal conocimiento de sus derechos, otorga a su empleador, el más amplio, completo, total y definitivo finiquito por los servicios prestados o la terminación de ellos, yo dije relación con remuneraciones, cotizaciones



previsionales, de Seguridad Social o de salud, subsidios, beneficios contractuales, adicionales a las remuneraciones, indemnizaciones, compensaciones, o con cualquier causa o concepto.

SEXTO: Asimismo, declara el trabajador que, en todo caso, ya todo evento, renuncia expresamente cualquier derecho, acción o reclamo que eventualmente tuviera que pudiere corresponderle en contra del empleador, en relación directa o indirecta con su contrato de trabajo, con los servicios prestados, con la terminación del referido contrato o dichos servicios, sea que sus derechos o acciones corresponden a remuneraciones, cotizaciones previsionales, de Seguridad Social o de salud, subsidios, beneficios contractuales adicionales a las remuneraciones, indemnizaciones compensaciones, o con cualquiera otra causa o concepto.”

Como ya se refirió, el finiquito cuenta con la firma del demandante y representante de la demandada y consta mediante un timbre las siguientes declaraciones *“con esta fecha fue leído ratificado y formado ante mi por el trabajador ya individualizado en señal de conformidad”* declaración relativa a lo dispuesto en el artículo 177 en relación a los efectos del finiquito condicionado al pago de las cotizaciones para fondos de pensiones, salud y de seguro de desempleo, y señala como fecha de autorización el día 10 de agosto de 2021 ante el Notario Publico a doña María Angelica Santibáñez Torres, Notario Público Suplente de la 35° Notaria de Santiago.

6°: Conforme a lo dispuesto en el artículo 177 del Código del Trabajo, el finiquito cumple con todas las formalidades establecidas en dicha norma, incluso se acredita el pago íntegro de las cotizaciones de seguridad social durante el periodo señalado.

Sin embargo, la demandante argumenta que dicho finiquito es nulo, pues su objeto es ilícito al contravenir normas de orden público, pero además adolece de vicios del consentimiento, cuales son el error y la fuerza moral, pues se le obliga a firmar bajo presión que de no hacerlo no existiría una nueva contratación.

7°: En relación al objeto ilícito el artículo 1462 del Código Civil señala *“Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público chileno. Así la promesa de someterse en Chile a una jurisdicción no reconocida por las leyes chilenas, es nula por el vicio del objeto.”*

Demandante menciona que el objeto de dicho finiquito es ilícito pues no se consigna en él las reales fechas de extensión de la vinculación laboral de las partes.

Corresponde mencionar que ambas partes incorporan idénticos documentos relativos a contratos y anexos de contratos. El primero de ellos corresponde al día 15 de



junio de 2020, en cuya clausula octava se menciona que el contrato tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2020 y que el trabajador inicia sus labores el 08 de junio de 2020. El anexo de contrato de trabajo de fecha 01 de julio de 2020 menciona en su cláusula segunda que prorroga el contrato de trabajo anterior, a contar del 01 de julio de 2020 y hasta el 31 de julio de 2020.

El tercer contrato, y que es el que hace referencia el finiquito, se celebra con fecha 07 de septiembre d 2020 y menciona en su clausula novena que el trabajador ingresa a prestar servicios a contra del 07 de septiembre del 2020, este contrato señala en su clausula octava que *“se extiende hasta el término de la alerta sanitaria. Ello sin perjuicio de la facultad que le asiste al empleador de poner término anticipado al mismo, si las condiciones sanitarias así lo permiten, caso en el cual se entenderá concluido el trabajo o servicio que dio origen al presente contrato.”* En este ultimo contrato el actor es contratado para prestar servicios como fiscalizador de las medidas sanitarias según consta de la cláusula primera.

Conforme a esta prueba documental se puede advertir que no existe continuidad en la prestación de los servicios, la que se ve interrumpida durante el mes de agosto y los primeros seis días del mes de septiembre. Sin perjuicio, que el certificado de pago de cotizaciones de seguridad social de Previred, menciona el pago de cotizaciones para el mes de agosto de 2020, esta lo es por una suma considerablemente menor a la de su remuneración que es declarada en los otros meses (\$896.000 para aquellos meses que trabaja íntegramente los 30 días). Se trata del pago de la suma de \$139.376, que son pagados, además, con fecha 08 de julio de 2021. Ninguna de las partes hace referencia a esta circunstancia, y la demandante tampoco construye o desarrolla una hipótesis de continuidad laboral, o de inexistencia de una notificación de término de contrato en relación al anexo de 01 de julio de 2020 que haya dado lugar a una contratación de carácter indefinido. En ese escenario nos preguntamos si la omisión a este primer periodo de vinculación laboral en el finiquito cuestionado ¿constituye un objeto ilícito? Creemos que no, puesto que si bien es efectivo que existen una serie de normas establecidas en el Código del Trabajo que tienen el carácter de irrenunciables, y que tiene por objeto dar una garantía mínima de respeto a los derechos del trabajador, en una relación contractual asimétrica, lo cierto, es que la demandante no menciona en que forma se vulneran normas del Código del Trabajo que tenga el carácter de irrenunciables y que por tanto puedan atentar contra el



orden público, pues al interrumpirse la relación contractual, como ha quedado establecido, y careciendo de una hipótesis y prueba en contrario, no es posible asumir una contravención de magnitud en dicha omisión. Incluso de considerar las sumas pagadas, que son objeto de reclamación por la demandante como argumento del objeto ilícito es dable mencionar, que en estricto rigor conforme al artículo 44 incisos penúltimo y final del Código del trabajo al trabajador no le corresponde pago de feriado proporcional cuando ha prestado servicios por 30 días o menos, o en el caso de que el contrato haya sido renovado y no supere los 60 días.

8º: En relación al vicio del consentimiento por la existencia de fuerza y error. La fuerza moral que se alega, para que esta pueda dar lugar al vicio del consentimiento debe reunir ciertas características, como que sea injusta o ilegítima; grave y determinante. En el primer caso debe tratarse de una amenaza contraria a la ley o al derecho; en el segundo caso conforme al artículo 1456 debe ser capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición y por último que sea determinante importa que debe ser utilizada con el fin de obtener la declaración de voluntad.

Todos estos elementos deben ser establecidos por quien lo alega.

Sin embargo, la única prueba que rinde el actor es la declaración de la testigo Nelly González, quien en la actualidad se desempeña para la demandada. La testigo menciona, que durante la pandemia conoció a Javier Moraga porque era de los funcionarios contratados para fiscalizar las alertas sanitarias, el llegó en junio de 2020 y fue desvinculado dos o tres meses después y después lo volvieron a contratar y luego al parecer al final de año lo despidieron. Sabe que tuvieron como 130 a 140 códigos, (refiriéndose a los trabajadores), agrega que ellos estaban avocados a la fiscalización de la gente que estaba en cuarentena y en ese tipo de trabajo era de lunes a domingo. Agrega que el problema de manejar códigos es que en el servicio público no se puede tener honorarios ni códigos, y esto fue un híbrido de distintos tipos, ellos tuvieron contratos a plazo fijo, algunos por dos o tres meses otros hasta el término de la pandemia, a ella le tocaba enrolar a los códigos es decir tomar sus huellas y de los distintos contratos se fueron enterando por el paso del tiempo que en algunos caso era de dos o tres meses, y otros hasta el final de la pandemia, después se enteraron que hubo algunos despidos injustificados no respetando el



contrato. Ellos como Seremi contaban con un departamento de RRHH reducido de 800 personas y llegaron a tener 8000 personas, por lo que se tuvo que crear una mini unidad, con gente externa que debía realizar estos distintos tipos de contratos. En relación a los finiquitos, estaba en la nebulosa porque ellos tenían contacto con esta gente del Minsal, y se enteraron después de que los despedían para volverlos a contratar.. pero los motivos los desconocían totalmente.

Esta declaración testimonial es la única prueba que se rinde por la demandante en relación al vicio del consentimiento que se invoca.

9º: En cuanto a la existencia de un error, el error entendido como la ignorancia o concepto equivocado que se tiene de una persona, cosa o de un hecho, está establecido en el artículo 1454 del Código Civil, en lo que respecta al error substancial y artículo 1454 inciso segundo en lo que respecta al error sobre las cualidades accidentales elevadas a la categorías de esenciales que son las hipótesis que dan lugar al vicio del consentimiento.

A estos efectos, nuevamente la única prueba que se ha rendido por el demandante es la declaración de la testigo antes señalada, quien hace referencia a la existencia de un modelo de contratación, pero nada menciona en relación a una percepción equivoca, por una promesa o engaño dirigida al demandante.

10º: De esta manera la prueba que rinde es absolutamente insuficiente, imprecisa y vaga para establecer la existencia de un vicio en el consentimiento, pues la testigo contextualiza la forma en que durante la pandemia se contrataba al personal, y el conocimiento de contrataciones a plazo fijo, pero nada menciona respecto de la existencia de alguna presión, fuerza moral o error verificada por la institución para obtener la firma del finiquito por el actor.

Luego, resulta relevante mencionar que el demandante concluye su prestación de servicios con fecha 31 de octubre de 2020, a continuación, aquel deduce reclamación ante la Contraloría general de la República, quien solicita antecedentes a la demandada. Con fecha 05 de mayo de 2021, se extiende el finiquito para el trabajador, y este concurre a su firma ante la Notaria correspondientes tres meses posteriores, esto es el día 10 de agosto de 2021, circunstancia que resulta relevante si se tiene en consideración que desde el término de la relación laboral a la fecha de firma del finiquito en total transcurre aproximadamente



10 meses, tiempo del todo extenso para concluir que pudo reflexionar, estudiar, incluso asesorarse de la conveniencia e inconveniencia de la firma del finiquito.

La resolución de Contraloría General de la Republica se emite con fecha 01 de septiembre de 2021, (posterior a la firma del finiquito) y en aquella se instruye a la demandada remitir documentación, pero disponiendo que en caso de carecer de aquella, el trabajador debía ser reincorporado y pagar sus remuneraciones, resolución que es dejada sin efecto en atención a la comunicación efectuada por la demandada a dicho órgano en orden a la firma de un finiquito.

11°: Conforme a lo razonado, corresponde rechazar la nulidad impetrada y acoger la excepción de finiquito, la que al cumplir con todos los supuestos del artículo 177 del Código del Trabajo, tiene carácter transaccional con efecto de cosa juzgada, no siendo dable dar lugar a las peticiones efectuadas.

12°: El resto de las alegaciones y probanzas no contiene información que contradiga aquellos hechos asentados por los medios que se han tenido en consideración para resolver la controversia en este pleito.

13°: No se condena en costas a la demandante, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Por estas consideraciones y, visto además lo dispuesto en los artículos 1, 7, 177, 420, 425, 432, 453, 454, 456, 459 del Código del Trabajo; 1698 del Código Civil, y demás normas legales vigentes, SE DECLARA:

I.-Que se **acoge** la excepción de finiquito.

II.- Que, se **rechaza** la demanda en todas sus partes.

III.- Que, cada parte pague sus costas.

RIT O- 6519-2022

Dictada por LILIANA LEDEZMA MIRANDA, Juez Titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

RIT O-6519-2022
RUC 22- 4-0435825-5



Proveyó don(a) LILIANA LUISA LEDEZMA MIRANDA, Juez Titular del
2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.



A contar del 02 de abril de 2023, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>